



Infancia y Legislación

Hacia leyes mexicanas acordes con la Convención sobre los Derechos de la Niñez

Robert Cohen¹

¿Cuenta México con leyes que protegen cabalmente a su niñez?

El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la *Convención sobre los Derechos de la Niñez* (CDN), tratado internacional que reconoce a todos los menores de 18 años como sujetos plenos de derechos. Desde entonces, todos los países del mundo -menos dos- han ratificado a la Convención, convirtiéndola en el instrumento sobre derechos humanos que más consenso ha suscitado entre los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Dada la naturaleza y diversidad de sus normas, la CDN contiene un riquísimo contenido de derechos y garantías fundamentales, así como obligaciones de los Estados, la familia y la sociedad, para hacerlos efectivos. El presente, y sobre todo el futuro de la democracia está en gran parte en el respeto de los derechos y garantías de la niñez, porque en sus manos está la construcción de una nueva sociedad. La CDN debe ser interpretada desde una concepción activa de la realidad social, en donde su normatividad y desarrollo se conviertan en verdaderos elementos de transformación social.

La CDN es un instrumento jurídico al servicio de una política de desarrollo de la infancia. Desde esta perspectiva, las necesidades de los niños, de las niñas y de los adolescentes comienzan a percibirse como derechos. Esta última afirmación abre el debate sobre uno de los temas centrales que deberán abordarse: la "exigibilidad de los derechos". En otras palabras, el desafío consistirá, sin duda, en crear y/o fortalecer los mecanismos políticos, sociales y

¹ Oficial de los derechos de la niñez. UNICEF, México. Especialista en comunicación y difusión de la *Convención sobre los Derechos de la Niñez*.



jurídicos que posibiliten tanto el cumplimiento de los derechos consagrados en la CDN como la rectificación de su incumplimiento o violación.

El cambio en la concepción de la infancia como objeto de programas o intervenciones sociales, a la de SUJETOS-ACTORES implica una profunda transformación conceptual y operativa. Significa abandonar la concepción del niño, de la niña y del adolescente como objeto de protección-represión de los adultos por otra: la de titulares de los derechos plenos de ciudadanía. Quiere decir complementar la visión de derechos negativos (no hacerle daño alguno al infante) con otra más importante relacionada con los derechos positivos, en cuya garantía están involucrados el Estado, la familia y la comunidad. A partir de esta nueva visión de la infancia, el gran reto que tenemos los adultos es servir a los niños, a las niñas y a los adolescentes, primordialmente según lo que ellos mismos definen como sus problemas y prioridades.

La nación mexicana, al ratificar la CDN el 21 de septiembre de 1990, se comprometió de acuerdo con su artículo 4o. a tomar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para hacer efectivos los derechos y garantías reconocidos en ella. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la CDN ya se considera norma de derecho interno.

En 1994, luego de examinar al Primer Informe del Gobierno de México sobre la aplicación de la CDN, el Comité de la ONU de los Derechos de la Niñez recomendó que el Gobierno *...tome las medidas necesarias para armonizar plenamente la legislación federal y estatal con las disposiciones de la Convención.*

En 1997, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó en 33 tomos un análisis comparativo de las leyes mexicanas en materia de infancia y mujer con la *Convención sobre los Derechos de la Niñez* (CDN) y la *Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer* (CEDM), formulando diversas propuestas de modificación con el fin de adecuar la legislación nacional y estatal a los compromisos internacionales. Los gobiernos de los estados se comprometieron con la Secretaría de Gobernación a iniciar procesos de reformas legislativas con base en esas propuestas. Tenemos información en el sentido de que han habido avances en hasta 28 entidades federativas.

Durante los últimos años, tanto a nivel federal como a nivel estatal, se han promulgando algunas reformas a leyes específicas con el fin de fortalecer el reconocimiento de los derechos y garantías de los niños, de las



niñas y de los adolescentes consagrados en la CDN. Sin embargo, todavía existen leyes a nivel federal, y en particular, a nivel estatal, contrarias a la letra, al espíritu y a los principios de la Convención.

Además, las normas sobre la niñez en México se encuentran dispersas, fragmentadas, de tal suerte que es notorio que hacen falta principios ordenadores y unificadores que permitan un adecuado marco de interpretación y aplicación de las nuevas leyes conforme al espíritu de la Convención.

Existen actualmente varias iniciativas en marcha tendientes a armonizar a la legislación mexicana con la CDN. En vísperas del X aniversario de la aprobación de la CDN, en el umbral del Siglo XXI y de un nuevo milenio, estos esfuerzos se tornan cada vez más urgentes. En la mayoría de los países de América Latina se han llevado a cabo procesos participativos, de reforma y adecuación de sus legislaciones internas a la CDN, que han fortalecido sus respectivas democracias, al gestarse en una concertación entre gobierno y sociedad civil. Urge llevar a cabo un diálogo amplio y democrático entre todos los mexicanos, con el objetivo de llegar al año 2000 con una legislación que proteja y garantice plenamente el respeto a los niños, a las niñas y a los adolescentes, y fortalezca las capacidades de la familia, del Estado y de toda la sociedad para cuidar de su niñez.

Es por esto que nos parece relevante que se publiquen artículos como los que aquí se presentan, sobre todo porque son resultado de ponencias y discusiones públicas. El artículo de Marvin Rabanales plantea una reflexión sobre los retos y dificultades que han surgido al tratar de realizar reformas legislativas en los países latinoamericanos para que sean más acordes con la *Convención sobre los Derechos de la Niñez*. El de Laura Salinas expone un análisis comparativo de las principales normas mexicanas, federales y locales, para verificar si atienden o no a lo dispuesto en los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país, y hace propuestas de modificación a las normas que no tutelan los derechos de las mujeres o de los niños, como son definidos en la *Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDM)* y la *Convención sobre los Derechos de la Niñez (CDN)*. Finalmente, el artículo de Pujol y Torres analiza diversos problemas relativos al panorama normativo internacional y nacional de los derechos de los niños y las niñas relacionados con la legislación civil, el contexto socioeconómico y la globalización. Discute concretamente tres campos de derechos básicos como son: el derecho a ser protegido, a vivir con

Cohen, Robert. 2000. "Infancia y legislación. Hacia leyes mexicanas acordes con la Convención sobre los Derechos de la Niñez", en Corona Caraveo, Yolanda (coord.), *Infancia, legislación y política*, UAM, México, pp. 17-20.



los padres y convivir con ellos; el derecho a la educación y el derecho a no ser abusado ni física, ni mental o sexualmente.

Esperamos que estas discusiones vayan dándose cada vez más en todos los sectores de la sociedad, de manera que podamos avanzar en el reconocimiento y aplicación real de los derechos y garantías que para las niñas, los niños y los adolescentes propone la Convención.